

PERU

Open letter to presidential candidates

The following open letter by Amnesty International's Secretary General was sent on 6 March 2000 to presidential candidates standing in Peru's forthcoming elections of 9 April 2000.¹

The organization has been seriously concerned that during the past two decades the Peruvian authorities have not had a serious and committed policy for the promotion and protection of human rights. In his letter, Amnesty International's Secretary General is urging candidates to give priority in their party manifestos to the respect of human rights.

¹ The letter was sent to the following candidates: Alejandro Toledo, candidate for *Perú Posible*; Alberto Fujimori Fujimori, candidate for *Alianza Electoral Peru 2000*; Alberto Andrade Carmona, candidate for *Movimiento Independiente Somos Perú*; Luis Castañeda Lossio, candidate for *Solidaridad Nacional*; Máximo San Román, candidate for *Unión por el Perú*; Federico Salas Guevara, candidate for *Avancemos*; Víctor Andrés Garacía Belaunde, candidate for *Acción Popular*; Abel Salinas Eyzaguirre, candidate for *APRA*; Ezequiel Ataucusi Gamonal, candidate for *Frente Popular Agrícola*.

I. Original letter²

Nº de ref^a: TG AMR 46/00.06

Londres, 6 de marzo de 2000

CARTA ABIERTA A LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES DE LA REPÚBLICA DE PERÚ

Amnistía Internacional se dirige a los candidatos presidenciales a las elecciones que se llevarán a cabo en la República de Perú el próximo 9 de abril, a fin de poner en su conocimiento las inquietudes de la organización en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional se permite exhortar a cada uno de los candidatos a que den prioridad a la promoción y protección de los derechos humanos en el programa electoral de su partido.

En repetidas oportunidades se ha dirigido Amnistía Internacional al gobierno peruano sobre sus principales motivos de preocupación en los últimos veinte años. Sin embargo, la organización considera que la política y la actuación de las autoridades peruanas en las dos últimas décadas han estado bastante distantes de una política seria y comprometida con la promoción y la protección de los derechos humanos.

En junio de 1999 el gobierno peruano tomó la decisión de retirarse con efectos inmediatos de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este grave hecho significa que Perú les está negando a sus habitantes el beneficio de un escrutinio judicial independiente en los casos en los que los derechos que les otorga la Convención Americana sobre Derechos Humanos hayan sido violados y en los que los tribunales nacionales no hayan proporcionado remedios efectivos. Un paso fundamental para demostrar la seriedad del próximo gobierno con respecto a los derechos humanos sería dejar sin efecto el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Este paso volvería a abrir las puertas a la posibilidad de que víctimas de derechos humanos y sus familiares reciban justicia y reparación.

Durante los últimos 20 años la gran mayoría de las víctimas de violaciones derechos humanos y sus familiares no han recibido justicia por parte de los tribunales nacionales en Perú. En muy pocas ocasiones los responsables de estas violaciones han sido

² See page 10 for a translation of the letter into English.

juzgados y sentenciados y las víctimas recibido reparación. Es más, en 1995 las autoridades decidieron que todas las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 1995 por miembros de las fuerzas de seguridad quedaran impunes, cuando promulgaron las Leyes de Amnistía en junio de ese año.

Según la información, recopilada por la organización más de 5000 personas, hombres, mujeres y niños, fueron torturadas "desaparecidas" o ejecutadas extrajudicialmente entre 1980 y 1995 por miembros de las fuerzas de seguridad. Las Leyes de Amnistía que han sido promulgadas en el Perú, violan las obligaciones internacionales del Estado peruano. Tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido que los Estados tienen la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos, llevar a juicio a los presuntos responsables y, si son hallados culpables, sancionarlos y reparar a las víctimas.

Estas Leyes de Amnistía perpetúan y legalizan la impunidad. La impunidad niega los valores de verdad y justicia y propicia que se cometan más violaciones de derechos humanos. Estas leyes tienen por efecto impedir que la verdad salga a la luz y que se atribuyan responsabilidades penales, por lo tanto son del todo inaceptables. Amnistía Internacional considera que el próximo gobierno debería derogar y anular estas leyes y otorgar el derecho a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, tanto del pasado como del presente, y a sus familias a conocer la verdad y a recibir una reparación justa y adecuada por el sufrimiento al que han sido sometidas.

La organización es consciente de que desde 1993 las desapariciones forzadas y la ejecuciones extrajudiciales disminuyeron. Amnistía Internacional reconoce que esta disminución es un avance con respecto a estas graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, preocupa a la organización que continúa recibiendo informes de personas que han sufrido tortura y maltrato por parte de las fuerzas de seguridad. En 1998 entró en vigor la Ley 26,926 que modificó el Código Penal al incorporar y tipificar como delito la tortura. Amnistía Internacional acogió con beneplácito este paso hacia la erradicación de la tortura, no obstante, considera que si las autoridades están seriamente comprometidas a eliminarla en la práctica deben tomar medidas suplementarias. En este contexto me permito incluir en un anexo 12 recomendaciones^[3] para eliminar la tortura durante el próximo gobierno. La organización considera que con voluntad política se puede "vivir sin tortura".

Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) han cometido serias atrocidades durante las dos últimas décadas. Amnistía Internacional les

³ See appendix 1 for a copy of these recommendations in Spanish and English.

reitera, señores candidatos, que la organización condena rotundamente los abusos cometidos por estos grupos.

El Estado peruano tiene el derecho y la obligación de sancionar los abusos cometidos por estos grupos y de proteger a sus ciudadanos. Sin embargo, en su persecución de estos delitos, el Estado debe velar por la plena vigencia del estado de derecho, por la legalidad de los procedimientos y por los derechos humanos de las personas detenidas, de acuerdo a los estándares internacionales. Desde 1980 ha preocupado a la organización la respuesta oficial a la violencia cometida por Sendero Luminoso y el MRTA. Preocupa sobremanera la legislación antiterrorista que entró en vigor desde 1992. Como es de su conocimiento, el propio gobierno aceptó que por medio de esta legislación se habían cometido "errores" y cientos de personas habían sido falsamente acusadas de delitos de "terrorismo".

Es así que en 1996 se creó una comisión especial para evaluar estos casos y presentárselos al Presidente de la República para indulto. Más de 400 mujeres y hombres fueron indultados o recibieron el derecho de gracia desde la creación de la Comisión hasta el 31 de diciembre de 1999 cuando terminó su mandato.

Si bien terminó la Comisión su mandato, no terminó la pesadilla para cientos de personas que continúan falsamente en prisión por delitos de "terrorismo". La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tiene registrados por lo menos 200 casos de personas que el día de hoy debieran estar en libertad y no en cárceles de máxima seguridad. El próximo gobierno deberá tomar las medidas necesarias para asegurarse de que todos y cada uno de los "presos inocentes" sea liberado inmediata e incondicionalmente al igual que compensado debidamente.

Preocupa a la organización que otro legado de la guerra interna con Sendero Luminoso y el MRTA sea el gran número de requisitorizados que corren peligro de recibir un juicio injusto y en muchas ocasiones de ser encarcelados por un crimen que no cometieron. Amnistía Internacional considera que debe ser prioridad del próximo gobierno atender esta problemática para resolver cuanto antes la incertidumbre de miles de personas que se encuentran en esta situación.

Es imperativo también que la legislación antiterrorista en su conjunto sea modificada para que todos aquellos juzgados bajo estas leyes reciban un juicio justo, derecho fundamental consagrado tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ya las autoridades han tenido a bien hacer varias modificaciones a esta legislación desde 1993. Por ejemplo, el uso de jueces sin rostro caducó en octubre de 1997 y el derecho al recurso de *habeas corpus* fue reinstaurado en 1993.

No obstante, los acusados de "traición a la patria" bajo la legislación antiterrorista, siguen siendo juzgados bajo el sistema judicial militar. Amnistía Internacional cree que los tribunales militares de Perú no son ni independientes ni imparciales. En estos tribunales, los que intervienen en el juicio son oficiales militares subordinados al juez, quien a su vez ejerce su cargo dentro de la jerarquía militar. Además, según el reglamento que rige los procedimientos de los tribunales militares, Ley Orgánica de Justicia Militar, a los jueces no se les exige tener experiencia judicial. Por lo tanto, la posibilidad de un juicio justo es muy limitada.

Cabe mencionar que el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados declaró, tras su visita a Perú en 1996, que los tribunales militares no garantizaban el derecho a un tribunal independiente e imparcial ni a un juicio justo (Doc. ONU: E/CN.4/1998/39/Add.1). Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró en sus Observaciones preliminares al tercer informe periódico de Perú de 1996 que los "procesos contra civiles deben llevarse a cabo en tribunales civiles, integrados por jueces independientes e imparciales" (Doc. ONU: CCPR/C/79/Add.67, Párrafo 12). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también concluyó en su informe anual de 1997 que estos tribunales no aseguraban las garantías procesales debidas (Doc OEA: OEA/Ser.L/V/II.98, Página 985). El próximo gobierno debe asumir plenamente sus obligaciones internacionales y acatar las recomendaciones de estas instancias intergubernamentales independientes.

Amnistía Internacional considera que el periódico y público escrutinio, tanto por organismos intergubernamentales como no gubernamentales, de la situación de los derechos humanos y la responsabilidad de los agentes del Estado, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad, constituyen una salvaguardia fundamental para la protección de los derechos humanos. El respeto a estos derechos y a la dignidad humana de muchos sectores de la sociedad podría mejorarse de forma sustancial si los gobiernos se sometieran al escrutinio de estos organismos y acataran sus recomendaciones. El grave hecho de que Perú se haya retirado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un peligroso e inaceptable precedente que mina la protección judicial internacional de los derechos humanos, y que debe ser corregido cuanto antes por el nuevo gobierno.

Preocupan también sobremanera las condiciones carcelarias en las cárceles de máxima seguridad. La cárcel de Challapalca, a más de 4,600 metros de altura y situada en un lugar alejado, no solamente pone en peligro la salud de los presos, sino que también supone un obstáculo para el acceso de familiares, médicos y representantes legales a los reclusos. En los penales de máxima seguridad en donde se encuentran presos por delitos de "terrorismo" continúan habiendo restricciones tales como en el tipo de contacto que se les permite a los reclusos con sus familiares en las horas de visitas. Además, las condiciones en las cárceles de presos y presas comunes, tales como el hacinamiento y la

salubridad, son preocupantes. Amnistía Internacional espera que el nuevo gobierno se comprometa a aplicar en todas las cárceles las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas.

Por otro lado, Amnistía Internacional continúa recibiendo informes de hostigamiento a periodistas que se oponen al régimen actual o que hacen públicas violaciones de derechos humanos cometidas supuestamente por miembros del Servicio de Inteligencia Nacional. El próximo gobierno debe comprometerse a respetar irrestrictamente la libertad de expresión.

Me permito también referir a los señores candidatos a la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998. La Declaración refleja el importante papel que cumplen los individuos, los grupos y las organizaciones no gubernamentales en la defensa y la promoción de los derechos humanos y en la lucha para eliminar las violaciones de estos derechos. En opinión de Amnistía Internacional no hay país ni sistema en el mundo que no necesite defensores de derechos humanos. Todos nos beneficiamos de los sacrificios que por nosotros han hecho miles de defensores, muchos de ellos de forma anónima.

Amnistía Internacional insta a los señores candidatos a respaldar la legítima labor de los defensores de los derechos humanos y a repudiar cualquier acto de hostigamiento o ataque contra ellos por agentes del Estado. Proteger a los defensores de derechos humanos y garantizar que su trabajo pueda ser desarrollado sin obstáculos es invertir en el futuro.

Asimismo, la organización espera que el programa presidencial de principios del siglo XXI refleje de una manera concreta y sin restricciones los compromisos contraídos por Perú respecto a las normas internacionales de derechos humanos. Me refiero no solamente a los estándares que protegen los derechos civiles y políticos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también a las normas que protegen a la mujer como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), al igual que a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Igualmente, la organización confía en que un liderazgo político basado en el pleno respeto de los derechos humanos en el próximo periodo presidencial conlleve a que el Estado peruano se adhiera a las siguientes normas internacionales relativas a los derechos humanos: Protocolo Adicional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

sobre la abolición progresiva de la pena de muerte; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos también relativo a la abolición de la pena de muerte; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada; Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional; Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; y la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Además el Estado debería hacer las declaraciones de los artículos 21 y 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que permiten someter al Comité contra la Tortura comunicaciones de Estados y de individuos.

Señores candidatos, Amnistía Internacional espera que el candidato elegido para la presidencia de la República en las próximas elecciones se asegure de poner Perú a la vanguardia en materia de promoción y protección de los derechos humanos. Para este efecto no huelga recordar las recomendaciones de la Declaración y Programa de Acción de Viena adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993 sobre la importancia de crear un Plan Nacional de Acción que identifique los pasos para mejorar el respeto a los derechos humanos de todos. A principios del siglo XXI es inaceptable que cualquier Estado continúe violando los derechos humanos de sus habitantes.

Muy atentamente.

Pierre Sané
Secretario General

ANEXO

Recomendaciones de Amnistía Internacional a los Candidatos Presidenciales para Erradicar la Tortura

1. Condena oficial

Las más altas autoridades del país deben demostrar su total rechazo a la tortura y condenarla cuando se produzca. Deben dejar claro a todos los miembros de la policía, de las fuerzas militares y demás fuerzas de seguridad que la tortura no será tolerada bajo ningún pretexto.

2. Legislación antiterrorista

Deben revisarse las leyes contra el terrorismo para adaptarlas a las normativas internacionales que garantizan un juicio justo. Y, concretamente, debe abolirse la utilización de tribunales militares para juzgar a civiles.

3. Acceso a los presos

Debe garantizarse que todos los presos, por graves que sean los delitos de los que están acusados, comparezcan sin demora ante una autoridad judicial tras su privación de libertad y que los familiares, abogados y médicos tengan acceso a ellos sin demora y de forma periódica. Debe disponerse en todo momento de remedios jurídicos eficaces, como el derecho de hábeas corpus, para que presos, familiares y abogados puedan tener garantizada la seguridad de quienes se ven privados de libertad y para que tanto familiares como abogados sepan de inmediato dónde está recluido un preso y de qué autoridad depende.

4. Salvaguardias durante la detención

Debe informarse inmediatamente a todos los presos de sus derechos, entre ellos el derecho a denunciar el trato que reciben. Las autoridades responsables de la detención deben ser distintas de las encargadas del interrogatorio. Los jueces deben tener el derecho y el deber de supervisar eficazmente la detención de los presos. Deben realizarse inspecciones periódicas, independientes, no anunciadas y sin restricciones de todos los centros de detención.

Debe abolirse la práctica del confinamiento solitario prolongado de los presos condenados.

5. No hacer uso de las declaraciones conseguidas mediante tortura

El gobierno debe garantizar que no se invoquen las declaraciones y demás pruebas obtenidas mediante tortura en ningún acto procesal, salvo contra una persona acusada de tortura en tanto que prueba la existencia de la declaración.

6. Investigación

Debe garantizarse la investigación sin demora, de forma imparcial y efectiva, de todos los informes y denuncias de torturas a cargo de una instancia independiente de la de los presuntos torturadores. Los métodos y los resultados de dichas investigaciones deben hacerse públicos. Los funcionarios sospechosos de haber cometido torturas deben ser destituidos del servicio activo durante la investigación. Los denunciantes, los abogados, los testigos y sus familias deben estar protegidos de la intimidación y de las represalias.

7. Procesamiento

Las personas responsables de torturas, entre ellas las que las han ordenado, deben comparecer ante la justicia. Los castigos deben ser proporcionales a la gravedad del delito.

8. Derecho a remedio jurídico efectivo

Derogar las leyes de amnistía de 1995 y garantizar a las víctimas de tortura de entre 1980 y 1995 el derecho a remedios jurídicos efectivos.

9. Compensación y rehabilitación

Las víctimas de tortura y las personas a su cargo deben tener derecho a obtener una reparación rápida, justa y adecuada del Estado, como atención médica adecuada, compensación económica y rehabilitación.

10. Formación

Durante la formación de todos los funcionarios implicados en la custodia, en el interrogatorio o en el cuidado médico de los presos debe dejarse claro que la tortura es un acto delictivo. Estos mismos funcionarios deben ser informados de que tienen el derecho y el deber de negarse a obedecer cualquier orden de tortura. Nunca se invocará la orden de un oficial superior para justificar la tortura.

11. Tratados y Organismos Internacionales

El gobierno debe cumplir las obligaciones que tiene contraídas en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que contienen salvaguardias contra la tortura, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El gobierno debe revocar la decisión de retirarse de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y acatar sus recomendaciones.

12. Responsabilidad internacional

El gobierno debe recurrir a todos los canales disponibles para interceder ante los gobiernos de países donde se hayan producido casos de tortura. Debe asegurarse de que las transferencias de material, de conocimientos y de formación para uso militar, de seguridad

o policial no alienten la tortura. El gobierno también debe cerciorarse de que ninguna persona sea devuelta por la fuerza a un país donde corra el riesgo de ser torturada.

II. English Version

Ref.: TG AMR 46/00.06

London, 6 March 2000

OPEN LETTER TO CANDIDATES IN THE PERUVIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS

Amnesty International is writing to all the candidates in the Peruvian presidential elections scheduled for 9 April next in order to inform you of the organization's human rights concerns.

Amnesty International would urge each of you to ensure that your party's electoral program prioritizes human rights promotion and protection.

On many occasions, over the last 20 years Amnesty International has communicated its main concerns to the Peruvian Government. However, in the organization's view, the policies and actions of the Peruvian authorities over the last two decades have shown little indication that they are seriously committed to promoting and protecting human rights.

In June 1999 the Peruvian State took the decision to withdraw from the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights with immediate effect. This means that the inhabitants of Peru are being denied the benefit of independent judicial scrutiny in cases where their rights under the American Convention on Human Rights have been violated and where the Peruvian courts have not provided effective redress. One important way for the next government to demonstrate that it is serious about respecting human rights would be for it to reverse the decision to withdraw from the jurisdiction of the Inter-American Court. This would open the way once again for victims of human rights violations and their relatives to be able to obtain justice and redress.

Over the last 20 years the vast majority of victims of human rights violations and their relatives have been unable to obtain justice through the Peruvian courts. Only rarely have those responsible for such violations been tried and sentenced or the victims received redress.

What is more, with the passing of Amnesty Laws in June 1995, the authorities ensured that all human rights violations committed by the security forces between 1980 and 1995 would remain unpunished.

According to information gathered by the organization, over 5,000 people - men, women and children - were tortured, "disappeared" or suffered extrajudicial execution at the hands of members of the security forces between 1980 and 1995. The Amnesty Laws passed in Peru violate the Peruvian State's obligations under international law. Both the United Nations Committee on Human Rights and the Inter-American Commission on Human Rights have affirmed that States have a duty to investigate human rights violations, bring those responsible to trial and, if they are found guilty, punish them and provide redress to the victims.

The Amnesty Laws perpetuate and legalize impunity. Impunity constitutes a denial of the principles of truth and justice and encourages further violations of human rights. Such laws are completely unacceptable because they effectively prevent the truth from coming to light and ensure that those responsible escape criminal prosecution. Amnesty International believes that the next government should repeal and annul these laws and give all victims of human rights violations, both past and present, as well as their relatives, the right to know the truth and to obtain fair and adequate redress for the suffering to which they have been subjected.

The organization is aware that since 1993 there has been a reduction in the number of “disappearances” and extrajudicial executions. Amnesty International recognizes that this demonstrates that progress has been made with regard to those particular serious human rights violations. However, the organization remains concerned at continuing reports that torture and ill-treatment is being inflicted by the security forces. In 1998, Law 26,926, which amended the Criminal Code to make torture a specific criminal offence in itself, came into effect. While welcoming this step towards the eradication of torture, Amnesty International believes that if the authorities are seriously committed to eliminating it in practice, further measures need to be taken. To this effect I am attaching an appendix [See page 15] containing twelve recommendations on how torture can be eliminated by the next government. The organization believes that if the political will exists, it is possible “to live without torture”.

Sendero Luminoso, Shining Path, and the *Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)*, Túpac Amaru Revolutionary Movement, have committed serious atrocities over the past two decades. Amnesty International would like to remind candidates that the organization categorically condemns any abuses carried out by these groups.

The Peruvian State has the right and duty to punish abuses committed by these groups and to protect its citizens. However, when prosecuting these offences, the State must ensure full respect, in accordance with international standards, for the rule of law, the legality of the proceedings and the human rights of the detainees. Since 1980 the organization has been concerned about the way in which the authorities have dealt with the use of violence by the Shining Path and the MRTA. It is particularly concerned about the anti-terrorism legislation which came into effect in 1992. As you are aware, the government itself acknowledged that “errors” had been made in applying this legislation and that hundreds of people had been falsely accused of “terrorism”.

In 1996 a special commission was therefore set up to assess these cases and to present them to the President of the Republic for pardon. Over 400 women and men were pardoned or granted clemency from the time when the Commission was set up until 31 December 1999 when its mandate ended.

Although the Commission’s mandate has come to an end, the nightmare being suffered by the hundreds of people who remain imprisoned on false “terrorism” charges has not yet ended.

The *Coordinadora Nacional de Derechos Humanos*, National Human Rights Coordinating Body, has recorded at least 200 cases of people who should today be free instead of still being held in maximum security prisons. The next government should take all necessary measures to ensure that each and every one of the “innocent prisoners” is immediately and unconditionally released and appropriately compensated.

The organization is also concerned about another legacy of the internal armed conflict with Shining Path and the MRTA, that is to say, the large number of people against whom arrest warrants on suspicion of terrorism related offences have been issued and who are at risk of unfair trial and, in many cases, of being imprisoned for a crime they did not commit. Amnesty International believes that the next government should give priority to dealing with this situation so that the uncertainty that hangs over the thousands of people affected by it can be lifted as soon as possible.

It is also imperative that the anti-terrorism legislation as a whole is amended to ensure that those facing prosecution under it receive a fair trial, in keeping with their fundamental right under both the International Covenant on Civil and Political Rights and the American Convention on Human Rights. Since 1993 the authorities have already seen fit to make some changes to this legislation. For example, the use of faceless judges was ended in October 1997 and the right to apply for a writ of *habeas corpus* was reinstated in 1993.

Nevertheless, those accused of “treason” under the anti-terrorism legislation are still being tried by military courts. Amnesty International believes that military courts in Peru are neither independent nor impartial. In such courts, those conducting the trial are military officers who are subordinate to the judge who himself holds a rank within the military hierarchy. In addition, under the regulations governing procedures in military courts contained in the *Ley Orgánica de Justicia Militar*, judges are not required to have a legal background. There is therefore very little chance of having a fair trial.

With regard to this issue, the UN Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers stated after his visit to Peru in 1996 that the military tribunals failed to guarantee the right to an independent and impartial tribunal or the right to a fair trial (UN Doc. E/CN.4/1998/39/Add.1). The United Nations Committee on Human Rights also stated in its Preliminary Observations on Peru’s Third Periodic Report in 1996 that “trials of non-military persons should be conducted in civilian courts before an independent and impartial judiciary” (UN Doc. CCPR/C/79/Add.67, paragraph 12). The Inter-American Commission on Human Rights also concluded in its 1997 annual report that the military courts did not guarantee due process (OAS Doc. OAS/Ser.L/II.98, page 985). The next government must fully accept its international obligations and comply with the recommendations made by these independent inter-governmental bodies.

Amnesty International believes that periodic public scrutiny by both inter-governmental and non-governmental bodies of the human rights situation and the accountability of agents of the

State, including members of the security forces, serves as a fundamental safeguard for the protection of human rights. Respect for these rights as well as the human dignity of many sectors of society could be substantially improved if governments were to open themselves up to scrutiny by those bodies, and complied with their recommendations. Peru's withdrawal from the Inter-American Court of Human Rights sets a dangerous and unacceptable precedent which undermines international judicial protection of human rights and it is essential that this grave situation is corrected as soon as possible by the new government.

The organisation is also seriously concerned about the prison conditions in high security prisons. In Challapalca prison which is over 4,600 m high and in a remote area, the health of prisoners are put in danger and it is difficult for relatives, health officials and legal representatives to have access to the prisons. In the high security prisons for all detained on terrorism related offences there are still restrictions on, for example, contact with families during visiting times. Also of concern are conditions in prisons for common prisoners such as overcrowding and health issues. Amnesty International expects that the new government will comply with the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

In addition, Amnesty International continues to receive reports of harassment to journalists who oppose the current regime or who reveal human rights violations allegedly committed by members of the National Intelligence Service. The next government should ensure that freedom of expression is respected at all times.

I would like to draw candidates' attention to the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms which was adopted by the United Nations General Assembly on 9 December 1998. The Declaration reflects the important role played by individuals, groups and non-governmental organizations in defending and promoting human rights and in the struggle to put an end to the violation of these rights. In Amnesty International's opinion, there is no country or system in the world which does not need human rights defenders. We all benefit from the sacrifices that thousands of defenders have made on our behalf, often anonymously.

Amnesty International is calling on candidates to support the legitimate work of human rights defenders and to condemn any type of harassment or attack on them by agents of the State. Protecting human rights defenders and providing the necessary guarantees so that they can carry out their work unhindered should be seen as a form of investment in the future.

The organization also hopes that, within the presidential program for the beginning of the twenty-first century, Peru's commitments with regard to international human rights standards will be addressed as specifically and extensively as possible. I am talking not only about standards relating to civil and political rights, such as the International Covenant on Civil and Political Rights and the American Convention on Human Rights, but also about standards regarding the situation of women, such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Inter-American Convention to Prevent, Punish and

Eradicate Violence against Women (Convention of Belem do Pará), as well as the Convention on the Rights of the Child.

The organization also trusts that a political leadership founded on full respect for human rights during the next presidency will lead to Peru's accession to the following international human rights standards: the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty; the Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty; the Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons; the Rome Statute setting up the International Criminal Court; the Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against People with Disabilities; and the United Nations International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and their Families. The Peruvian State should also make the relevant declarations under articles 21 and 22 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, recognizing the competence of the Committee against Torture to receive and consider communications from both States and individuals.

Amnesty International hopes that the candidate who is elected President of the Republic in the forthcoming elections will ensure that Peru is in the vanguard when it comes to promoting and protecting human rights. In order for this to happen, it is worth bearing in mind the recommendations contained in the Vienna Declaration and Action Plan adopted by the World Conference on Human Rights in June 1993 on the importance of drawing up a National Action Plan identifying what steps need to be taken to bring about improved respect for the human rights of everyone. At the beginning of the twenty-first century, it is unacceptable for any State to still be violating the human rights of any of its inhabitants.

Yours sincerely,

Pierre Sané
Secretary General

ANNEX

Amnesty International's recommendations for the eradication of torture to presidential candidates in Peru

1. Official condemnation

The highest authorities should demonstrate their total opposition to torture and condemn it whenever cases arise. They should make clear to all members of the police, military and other security forces that torture will not be tolerated under any circumstances.

2. Anti-terrorism legislation

Review the anti-terrorism legislation to bring it into line with international fair trial standards. In particular, the use of military tribunals to try civilians should be abolished.

3. Access to prisoners

Ensure that all prisoners, however serious the crimes they are accused of, are brought before a judicial authority without delay after being taken into custody and that relatives, lawyers and doctors have access to them without delay and regularly thereafter. Effective judicial remedies, such as the right to *habeas corpus*, should be available at all times to enable prisoners, relatives and lawyers urgently to ensure a prisoner's safety and for relatives and lawyers to find out immediately where a prisoner is held and under what authority.

4. Safeguards during detention

All prisoners should be told of their rights immediately, including the right to lodge complaints about their treatment. The authorities responsible for detention should be separate from those in charge of interrogation. Judges should have the right and duty to supervise effectively the detention of prisoners. There should be regular, independent, unannounced and unrestricted visits of inspection to all places of detention.

Abolish the practice of solitary confinement for prisoners convicted.

5. No use of statements extracted under torture

The Government should ensure that statements and other evidence obtained through torture are not invoked in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made.

6. Investigation

Ensure that all complaints and reports of torture are promptly, impartially and effectively investigated by a body independent of the alleged perpetrators. The methods and findings of such investigations should be made public. Officials suspected of committing torture should be suspended from active duty during the investigation. Complainants, lawyers, witnesses and their families should be protected from intimidation and reprisals.

7. Prosecution

Those responsible for torture, including those who order it, should be brought to justice. Punishments should be commensurate with the gravity of the crime.

8. Right to effective remedy

Repeal the 1995 Amnesty laws and guarantee that the victims of torture between 1980 and 1995 have the right to an effective judicial remedy.

9. Compensation and rehabilitation

Victims of torture and their dependants should be entitled to obtain fair and adequate redress from the state promptly, including appropriate medical care, financial compensation and rehabilitation.

10. Training

It should be made clear during the training of all officials involved in the custody, interrogation or medical care of prisoners that torture is a criminal act. They should be instructed that they have the right and duty to refuse to obey any order to torture. An order from a superior officer must never be invoked as a justification for torture.

11. International treaties and bodies

The Government should abide by its obligations under the international human rights treaties containing safeguards against torture, such as the UN Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, as well as the International Covenant on Civil and Political Rights and the American Convention on Human Rights. The Government should revoke its decision to withdraw from the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights and abide by its recommendations.

12. International responsibility

The Government should use all available channels to intercede with the governments of countries where torture is reported. It should ensure that transfers of equipment, know-how and training for military, security or police use do not facilitate torture. The Government should also make sure that no one should be forcibly returned to a country where he or she risks being tortured.

KEYWORDS: ELECTIONS / AI AND GOVERNMENTS / AMNESTIES FOR VIOLATORS / NON-GOVERNMENTAL ENTITIES / MILITARY TRIBUNALS / HUMAN RIGHTS INSTRUMENTS / TORTURE/ILL-TREATMENT